



REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
JUZGADO VEINTISÉIS ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD DE BOGOTÁ

Bogotá D.C., dos (2) de julio de dos mil diecinueve (2019)

RADICACIÓN: 11001-33-35-026-2015-00671-00

PROCESO: EJECUTIVO

EJECUTANTE: LUIS ALBERTO ROJAS ÁLVAREZ

**EJECUTADA: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE
GESTIÓN PENSIONAL Y PARAFISCALES – UGPP**

ORDINARIO: 25000-23-25-000-2006-05888-01

A través de sentencia calendada 1º de septiembre de 2017, el Despacho declaró no probadas las excepciones propuestas por la entidad demandada y, ordenó seguir adelante la ejecución, disponiendo que se realizara la liquidación del crédito de conformidad con el artículo 446 del C.G.P. (fls. 128-135), siendo esta providencia notificada a las partes en estrados.

La anterior decisión, fue objeto de apelación por el extremo pasivo de la Litis, quien sustentó en la audiencia el recurso, concediéndose el mismo en el efecto devolutivo, razón por la cual se ordenó la remisión del expediente al Superior para lo de su competencia.

El H. Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante proveído de fecha 12 de julio de 2018, confirmó parcialmente la sentencia recurrida, revocando el ordinal sexto, mediante el cual se condenó en costas a la parte ejecutada.

Con base en lo anterior, el apoderado de la parte actora procedió a presentar la liquidación de crédito, tal como se puede observar en el memorial obrante a folios 166 a 171 del plenario.

Por su parte, la UGPP mediante memorial radicado el 19 de marzo de 2019, Presente liquidación de crédito, que en su consideración es la acertada, por cuanto la liquidación que aporta la parte ejecutante arroja un monto que excede el valor remitido por la entidad ejecutada, habida consideración que, el extremo activo de la Litis no tuvo en cuenta la fecha en que radicó la reclamación, atendiendo los lineamientos establecidos en el acta 1000 de 2016, pues los abogados externos de la UGPP deben acogerse a esta acta en la forma que allí se indica.

Así las cosas, de conformidad con lo allegado al plenario, debe el Despacho resolver si es viable o no aprobar la liquidación del crédito planteada por la activa, y para el efecto se analizará lo siguiente:

A. LIQUIDACIÓN DEL CRÉDITO PRESENTADA

El apoderado judicial de la parte ejecutante, señala en su liquidación de crédito que el monto total por concepto de intereses actualizados es de \$33.431.247.03; valor al que se le debe restar un pago parcial realizado en el mes de mayo del año 2018, por un valor de \$3.802.265.48, para un valor total adeudado por parte de la entidad ejecutada de \$29.628.981.55.

De la misma manera, en la liquidación se observa, que las fechas que tiene en cuenta el Profesional del Derecho para realizar la liquidación es a partir del 19 de junio de 2010 hasta el 18 de diciembre del mismo año; y desde el 1º de enero de 2011 hasta el 31 de diciembre del año 2018, sin sustentar los valores y la fórmula matemática que utilizó para sacar el valor total adeudado por la entidad.

Para tal efecto, aporta la respectiva liquidación visible de los folios 167 a 171 del plenario.

Conforme con lo anterior, el monto que arrojó la liquidación del crédito efectuada por el apoderado de la parte demandante, ascendió a un monto total de \$29.628.981.55.

B. TRASLADO

Tal como lo dispone el artículo 446 del C.G.P., de la liquidación de crédito que presente una de las partes, se debe correr traslado a la otra, en la forma prevista en el artículo 101 de la norma, en cuyo término se pueden formular objeciones.

En este sentido, la secretaría del Despacho procedió a correr el respectivo traslado de la liquidación a la parte demandada el día 14 de marzo de 2019, tal como se puede observar en la constancia obrante a folio 175 del plenario, corriendo el término desde el 15 hasta el 19 del mismo mes y año.

La UGPP mediante memorial radicado el 18 de marzo de 2019, señala que la liquidación que aporta la parte ejecutante arroja un monto que excede el valor remitido por la entidad ejecutada, habida consideración que, el extremo activo de la Litis no tuvo en cuenta la fecha en que radicó la reclamación, atendiendo los lineamientos establecidos en el acta 1000 de 2016, pues los abogados externos de la UGPP deben acogerse a esta acta en la forma que allí se indica.

Advierte que para el presente caso, la parte ejecutante no considera la fecha en que se dio cumplimiento a la sentencia, ni tampoco los tiempos muertos.

Para tal efecto aporta la siguiente liquidación:

DATOS CAUSANTE		DATOS BENEFICIARIO	
IDENTIFICACION	CC 10214125	IDENTIFICACION	
NOMBRES Y APELLIDOS	LUIS ALBERTO ROJAS ÁLVAREZ	NOMBRES Y APELLIDOS	

DATOS DE LA CONSTANCIA			
NUMERO DE RESOLUCIÓN		18395	FECHA 04/05/2017
FALLO PROFERIDO POR			
FECHA DE LA EJECUTORIA	18/06/2010	FECHA DE LA SOLICITUD	10/10/2011
FECHA DE PAGO CAPITAL	31/12/2011	CAPITAL	\$34.813.759.16
TOTAL INTERESES CALCULADOS		\$3.802.265.48	

LIQUIDACION DETALLADA				
DESDE	HASTA	TIPO DE TASA	DIAS	VALOR INTERES
18/06/2010	30/06/2010	1.5 COMERCIAL	13	\$256.405.37
01/07/2010	31/07/2010	1.5 COMERCIAL	31	\$598.044.87
01/08/2010	31/08/2010	1.5 COMERCIAL	31	\$598.044.87
01/09/2010	17/09/2010	1.5 COMERCIAL	17	\$327.960.09
18/09/2010	30/09/2010	CESACION INT	13	\$0.00
01/10/2010	31/10/2010	CESACION INT	31	\$0.00
01/11/2010	30/11/2010	CESACION INT	30	\$0.00
01/12/2010	31/12/2010	CESACION INT	31	\$0.00
01/01/2011	31/01/2011	CESACION INT	31	\$0.00
01/02/2011	28/02/2011	CESACION INT	28	\$0.00
01/03/2011	31/03/2011	CESACION INT	31	\$0.00
01/04/2011	30/04/2011	CESACION INT	30	\$0.00
01/05/2011	31/05/2011	CESACION INT	31	\$0.00
01/06/2011	30/06/2011	CESACION INT	30	\$0.00
01/07/2011	31/07/2011	CESACION INT	31	\$0.00
01/08/2011	31/08/2011	CESACION INT	31	\$0.00
01/09/2011	30/09/2011	CESACION INT	30	\$0.00
01/10/2011	09/10/2011	CESACION INT	9	\$0.00
10/10/2011	31/10/2011	1.5 COMERCIAL	22	\$535.901.52
01/11/2011	30/11/2011	1.5 COMERCIAL	30	\$730.774.80
01/12/2011	31/12/2011	1.5 COMERCIAL	31	\$755.133.96

En tales condiciones, procede el Despacho a pronunciarse respecto a la liquidación efectuada por la parte ejecutante.

CONSIDERACIONES

Como primera medida, es indispensable reiterar por parte del Despacho, lo anotado dentro de la sentencia que ordenó seguir adelante la ejecución, pues este Despacho Judicial realizó las siguientes precisiones, con el objeto que fueran tenidas en cuenta al momento de realizarse la liquidación del crédito:

“b. Liquidación del crédito

“Por tal razón, el Juzgado hace unas precisiones frente a la liquidación del crédito a realizarse, aclarando que el monto por el cual se libró mandamiento ejecutivo no es necesariamente el valor a cancelar, toda vez que ello está sujeto a la /liquidación del crédito, así como de las revisiones que oficiosamente haga el Despacho, pues la suma a pagar en los términos de la sentencia y lo pretendido en el proceso, son únicamente los intereses que generó el capital actualizado o debidamente indexado a la fecha de la ejecutoria de la sentencia, desde esta data hasta la fecha en que se incluyó en nómina o se realizó el pago o los pagos del capital debidamente indexado, aclarando que el referido capital indexado a la fecha de la mencionada ejecutoria, no puede ser indexado nuevamente con posterioridad a la fecha de su firmeza; así mismo, que los intereses pretendidos no pueden capitalizarse.”

En este sentido, el mandamiento de pago de fecha 25 de noviembre de 2016, también indicó lo siguiente:

“En ese sentido se tiene que el numeral 6° de la parte resolutive de la sentencia por este estrado judicial, y confirmada por el Honorable Tribunal Administrativo de Cundinamarca, impartió orden de cumplimiento a la misma en los términos señalados en la norma ya referida, esto es, con la inclusión de los intereses moratorios.

*En el plenario se tiene que la decisión de segunda instancia fue notificada el 29 de abril de 2010, quedando ejecutoriada el 18 de junio del mismo año. La Caja Nacional de Previsión Social E.I.C.E. (Ente hoy liquidado), profirió la Resolución **No. UGM 11394 del 30 de septiembre de 2011** que fue incluida en nómina en **enero de 2012**, en donde no se reflejó el pago de los intereses moratorios. Así mismo se establece de la resolución en comentario que la parte actora solicitó el cumplimiento de la providencia el día 4 de marzo de 2011, es decir, por fuera de los 6 meses siguientes a la ejecutoria de la sentencia.*

Por consiguiente, se tiene que si bien es dable librar mandamiento de pago respecto de los intereses moratorios causados en los primeros 6 meses siguientes a la ejecutoria de la sentencia de segunda instancia que confirmó lo dispuesto en su momento por esta agencia judicial, la radicación arribada al plenario no satisface el presupuesto para que se entiendan causados todos los intereses moratorios pretendidos, toda vez que la data de la misma es posterior a los 6 meses de la fecha de ejecutoria y por ende el pago de la obligación no es exigible respecto

del periodo comprendido entre el 19 de diciembre de 2010 al 3 de marzo de 2011.

*En consecuencia, siguiendo lo estipulado en el inciso final del artículo 177 de la Ley 1437 de 2011, el Despacho librará mandamiento ejecutivo por los intereses de mora que en el proceso ejecutivo constituyen el capital adeudado por la entidad demandada única y exclusivamente por los intereses moratorios causados entre el 19 de junio y el **18 de diciembre de 2010** (tiempo que corresponde a los 6 meses siguientes a la fecha de ejecutoria de la sentencia de segunda instancia) y desde el **4 de marzo de 2011** y hasta la fecha de inclusión en nómina, de acuerdo a lo expresado en la parte motiva de esta providencia.*

*En consecuencia, los valores adeudados a título de intereses moratorios ascienden a la suma de **DIEZ MILLONES NOVECIENTOS TRES MIL TRESCIENTOS CINCO PESOS M/CTE (\$10'903.305)** conforme a los ajustes hechos por el Juzgado a la liquidación presentada por la parte actora visible a folio 31 del expediente, sin que necesariamente este sea el valor a cancelar, toda vez que ello está sujeto a las excepciones que eventualmente presente la demandada y a la liquidación de crédito.*

Ahora bien, se observa que el artículo 177 del Código Contencioso Administrativo, norma aplicable al momento en que se profirió sentencia de mérito en el proceso ordinario, en relación con los intereses por los cuales se libró mandamiento de pago, disponía:

“Artículo 177. Efectividad de condenas contra entidades públicas. Cuando se condene a la Nación, a una entidad territorial o descentralizada al pago o devolución de una cantidad líquida de dinero, se enviará inmediatamente copia de la sentencia a quien sea competente para ejercer las funciones del ministerio público frente a la entidad condenada.

(...)

*<Apertes tachados Inexequibles – Sentencia C-188 de 1999> **Las cantidades líquidas reconocidas en tales sentencias devengarán intereses comerciales durante los seis (6) meses siguientes a su ejecutoria y moratorios después de este término.***

*<Inciso adicionado por el artículo 60 de la Ley 446 de 1998. El nuevo texto es el siguiente:> **Cumplidos seis (6) meses desde la ejecutoria de la providencia que imponga o liquide una condena o de la que apruebe una conciliación, sin que los beneficiarios hayan acudido ante la entidad responsable para hacerla efectiva, acompañando la documentación exigida para el efecto, cesará la causación de intereses de todo tipo desde entonces hasta cuando se presentare la solicitud en legal forma. (...)***

Al respecto, la Corte Constitucional al realizar el control de constitucionalidad de esta norma definió el tipo de intereses que se causan a partir de la ejecutoria de la sentencia y sobre el particular determinó:

“(...) la Administración Pública está obligada por un acto suyo a pagar unas determinadas cantidades de dinero a los particulares con quienes concilia y éstos

tienen derecho a recibirlas dentro de los términos pactados. No se pierda de vista que ellos sufren perjuicio por la mora en que la Administración pueda incurrir. Tales perjuicios se tasan anticipadamente mediante la fijación por la propia ley de intereses moratorios.

Para la Corte es claro que el principio de igualdad y la equidad imponen que en estos casos las dos partes reciban igual trato, sin que se justifique en modo alguno que mientras el Estado cobra a los contribuyentes intereses moratorios cuando ellos no pagan a tiempo los impuestos, y ello a partir del primer día de retardo en el pago, las obligaciones en mora a cargo del Estado deban forzosamente permanecer libres de la obligación de cancelar dichos réditos durante seis meses, con notorio perjuicio para los particulares que han debido recibir oportunamente los recursos pactados. Durante ese tiempo, el dinero no recibido por el acreedor pierde poder adquisitivo y no existe razón válida para que esa pérdida la deba soportar el particular y no el Estado, que incumple.

Es evidente la vulneración del artículo 13 de la Constitución Política, toda vez que, con independencia de si el deudor es el gobernado o el ente oficial, el hecho es el mismo; la circunstancia es equivalente; el daño económico que sufre el acreedor por causa de la mora es idéntico; y las obligaciones asumidas por las entidades públicas no tienen alcance jurídico diverso de las que están a cargo de las personas privadas.

*Por otro lado, en la disposición impugnada se muestra con claridad el desconocimiento de los principios de igualdad, eficacia y celeridad, que deben presidir la función administrativa, según el artículo 209 Ibidem. **El Estado, en sus relaciones con los particulares, no puede asumir legítimamente las conductas que censura y castiga si provienen de ellos. Si les exige puntualidad en el pago de sus obligaciones tributarias, y si tan duramente castiga el hecho de que no las cancelen a tiempo, elementales principios de justicia y equidad hacen imperativo que, correlativamente, su propio comportamiento en idénticas situaciones se ajuste a las exigencias que formula a los particulares. Pero, además, la mora en el pago de las obligaciones a cargo del fisco delata, en los servidores públicos responsables, un deplorable descuido que no encaja dentro de los criterios constitucionales que deben inspirar la actividad administrativa.***

Para la Corte, carece de fundamento la justificación que pretende aportar en este caso el Procurador General de la Nación, consistente en que las personas jurídicas de Derecho Público deben administrar sus recursos con base en el correspondiente presupuesto anual de ingresos y gastos, de lo cual pasa a sustentar la constitucionalidad del término de seis meses. Aunque en verdad, por mandato del artículo 345 de la Constitución, en tiempo de paz no puede hacerse erogación con cargo al Tesoro que no se halle incluida en el Presupuesto de gastos, es de elemental previsión, acorde con una mínima responsabilidad del Estado en el manejo de sus recursos, que se contemplen en los presupuestos anuales partidas destinadas al pago de las obligaciones a su cargo y de los intereses que se generan por razón de los retardos en que incurra. La negligencia administrativa no puede ser fuente de enriquecimiento sin causa para las arcas estatales ni de injustificado perjuicio para los particulares con quienes él mantiene pasivos.

Se declararán inexecutable las expresiones que, en la norma, dan lugar a la injustificada e inequitativa discriminación objeto de examen, y que favorecen la ineficiencia y la falta de celeridad en la gestión pública.

Las mismas razones expuestas son válidas respecto del último inciso del artículo 177 del Código Contencioso Administrativo (Decreto Ley 01 de 1984), que dice:

"Las cantidades líquidas reconocidas en tales sentencias devengarán intereses comerciales durante los seis (6) meses siguientes a su ejecutoria y moratorios después de este término".

Se declarará la unidad normativa y, por consiguiente, la disposición transcrita será declarada executable, salvo las expresiones "durante los seis (6) meses siguientes a su ejecutoria" y "después de este término", que serán declaradas inexecutable.

Es entendido que, en las dos normas sobre cuya constitucionalidad resuelve la Corte, el momento en el cual principia a aplicarse el interés de mora depende del plazo con que cuente la entidad pública obligada, para efectuar el pago. Así, en el caso de la conciliación, se pagarán intereses comerciales durante el término que en ella se haya pactado y, vencido éste, a partir del primer día de retardo, se pagarán intereses de mora. En cuanto al artículo 177 del Código Contencioso Administrativo, a menos que la sentencia que impone la condena señale un plazo para el pago -evento en el cual, dentro del mismo se pagarán intereses comerciales-, los intereses moratorios se causan a partir de la ejecutoria de la respectiva sentencia, sin perjuicio de la aplicación del término de dieciocho (18) meses que el precepto contempla para que la correspondiente condena sea ejecutable ante la justicia ordinaria."¹

Negrillas del Despacho

En ese sentido, se tiene que el numeral sexto de la parte resolutive de la sentencia proferida por este Despacho, impartió orden de cumplimiento a la misma en los términos señalados en los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo.

Tal decisión fue objeto de apelación, y en segunda instancia a través de sentencia proferida por el H. Tribunal Administrativo de Cundinamarca el 29 de abril de 2010, confirmó en su integridad la decisión adoptada por este Despacho Judicial.

La decisión judicial fue debidamente notificada a las partes, quedando ejecutoriada la providencia el **18 de junio de 2010 (fl. 23)**.

En consecuencia, los valores adeudados **a título de intereses moratorios**, deben ser aquellos que resulten de aplicar la fórmula respectiva, **sobre el capital adeudado al momento de la ejecutoria del fallo (18 de junio de**

¹ Sentencia C-188/99 **Referencia: Expediente D-2191.** Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 72 (parcial) de la Ley 446 de 1998. Demandantes: Ana María Acosta, Juliana Gómez, Cristina Trujillo, Adriana Gómez, Catalina Rozo Y Claudia Ochoa **Magistrado Ponente: Dr. JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO. Sentencia aprobada en Santa Fe de Bogotá, D.C., según consta en acta del veinticuatro (24) de marzo de mil novecientos noventa y nueve (1999).**

2010), que fue el instante preciso en el que nació el derecho a reclamar las cantidades reconocidas en la sentencia, las cuales aunque no fueron liquidadas si son liquidables.

Es decir, lo que se sanciona es el no pago oportuno del derecho previamente reconocido.

Por ello, se hace necesario establecer los efectos temporales tanto del art. 177 del C.C.A., como los del art. 141 de la ley 100 de 1993, para concluir que no puede ninguna de las partes incluir intereses diferentes a los que genere el capital indexado al momento de la ejecutoria de la sentencia y mucho menos de las diferencias de la mesada pensional de los meses posteriores a la referida ejecutoria, como quiera que estos tienen un fundamento diferente al dispuesto en la sentencia para su reclamación, que es el referido art. 141 de la ley 100 de 1993 que señala:

“ARTICULO. 141. -Intereses de mora. A partir del 1° de enero de 1994, en caso de mora en el pago de las mesadas pensionales de que trata esta ley, la entidad correspondiente reconocerá y pagará al pensionado, además de la obligación a su cargo y sobre el importe de ella, la tasa máxima de interés moratorio vigente en el momento en que se efectúe el pago.”

Se debe decir que, y esto para llegar a la conclusión expuesta en precedencia y acogiendo el criterio expresado por la Corte Suprema de Justicia², en el cual se vienen denegando el reconocimiento de los referidos intereses del art. 141 de la ley 100 de 1993, en las demandas donde se solicita la reliquidación pensional, porque los plurimentados intereses solo se causan por la mora del pago, más no por el reconocimiento incompleto de la prestación.

Dicha posición fue reafirmada por la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia en Sentencia SL-1642018 cuando explicó:

“Lo anterior, partiendo de la base que la génesis de los intereses moratorios obedece a una necesidad resarcitoria y protectora frente a los derechos pensionales que no hayan sido reconocidos. Por lo tanto, ordenar una reliquidación de la mesada pensional, parte de la base de que el derecho ya fue

² **CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE CASACIÓN LABORAL, MAGISTRADO PONENTE EDUARDO LÓPEZ VILLEGAS**
Referencia: Expediente No. 38993, Acta No. 25, Bogotá D.C., veintiuno (21) de julio de dos mil nueve (2010)
“Además ha sostenido esta Corporación que los intereses moratorios “...sólo proceden en el caso que haya mora en el pago de las mesadas pensionales, pero no cuando, como en este asunto ocurre, lo que se presenta es un reajuste a las mismas por reconocimiento judicial (Rad. 13717 – 30 junio de 2000), argumento este plenamente aplicable a este caso, pues la condena consistió en “los reajustes pensionales causados por su liquidación equivocada, actualizados anualmente a partir del 1° de enero de 1998, atendiendo el I.P.C. certificado por el DANE para el año inmediatamente anterior.” Sentencia Radicación No. 26754 de 2006.”

adjudicado, aunque de manera errónea. Al respecto, fue abordado de manera reciente en sentencia CSJ SL164-2018, donde se esgrimió:

En lo que concierne a este punto, basta con recordar que a juicio de esta Corporación los intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993 proceden cuando existe mora o retardo en el pago de las pensiones, pero no frente a su pago incompleto o deficitario. Así, en sentencia CSJ SL21027, 4 sep. 2003, reiterada en SL11427-2016 y SL12765-2017, se adocrinó:

Además, ha sostenido esta Corporación que los intereses moratorios "sólo proceden en el caso que haya mora en el pago de las mesadas pensionales, pero no cuando, como en este asunto ocurre, lo que se presenta es un reajuste a las mismas por reconocimiento judicial" (Rad. 13717-30 de junio de 2000), argumento este plenamente aplicable a este caso, pues la condena consistió en "los reajustes pensionales causados por su liquidación equivocada, actualizados anualmente a partir del 1° de enero de 1998, atendiendo el I.P.C. certificado por el DANE para el año inmediatamente anterior".

Por ello concluye el despacho que lo que se sanciona es el no pago oportuno del derecho previamente reconocido.

Por otra parte, como fue expuesto, el artículo 177 del C.C.A, dispone el reconocimiento de intereses sobre las sumas liquidas reconocidas en la sentencia. Ahora las sentencias pueden dar órdenes en concreto o en abstracto, de ahí que se infiera que las sumas adeudadas sean liquidas o liquidables.

De otra parte, sobre los referidos intereses, se aclara que la liquidación de los mismos debe hacerse únicamente sobre el valor neto del capital y no sobre el capital bruto deprecado, es decir, sobre el capital respecto del cual ha de proyectarse los intereses y sobre el cual se libró mandamiento, necesariamente debe descontarse las sumas que van con destino a pagos de seguridad social en salud del pensionado, pues no es dable que sobre dichos rubros también se generen intereses en el entendido que dichas sumas no son percibidas por el actor y en todo caso solo podrían ser reclamados por la entidad prestadora del servicio de salud a la cual fueron girados.

Así mismo, se debe tener claridad que los intereses corresponden a los que se causaron desde la ejecutoria de la sentencia hasta el día anterior a la inclusión en nómina de pensionados, descontando lo causado a partir del día en que fenecieron los 6 meses que corren a partir de la fecha de ejecutoria de la sentencia y hasta el momento en que elevó la petición de pago de cumplimiento de la misma ante la administración, motivo por el cual, para asuntos como el presente, no podrá hablarse de actualización de liquidación del crédito, pues la causación de intereses culminó con antelación incluso a la presentación de la demanda ejecutiva.

Por lo expuesto, el Despacho no se encuentra de acuerdo con la liquidación del crédito efectuada por el apoderado de la parte demandante, pues en primer lugar, se observa que los valores pagados al demandante, tal como se expuso por la UGPP en la certificación visible a folio 39 del plenario, no concuerdan con el capital que trae a colación la activa dentro de su liquidación, debiendo ser estos precisos, pues el monto de la reliquidación cancelada en cumplimiento de la sentencia no fue refutado y es la base para liquidar los intereses.

En tal virtud, procede el Despacho a modificar la liquidación del crédito dentro del presente asunto, la cual quedará de la siguiente manera:

LIQUIDACIÓN DE INTERESES MORATORIOS

CAPITAL INDEXADO		\$	41.722.898.76
DESCUENTOS SALUD		\$	4.350.461.36
CAPITAL NETO		\$	37.372.437.40

Fecha Ejecutoria:	18-jun-10	f. 112
Fecha Nomina.	Nov-11	f. 39

		CAPITAL	DIAS A PAGAR	% INT. CORRI	% INT. MORA	VALOR INT. MORA	INT. MORA ACUMULADO
19/06/2010	30/06/2010	\$ 37.372.437,40	11	15,31%	1,738%	\$ 238.117,05	\$ 238.117,05
01/07/2010	31/07/2010	\$ 37.372.437,40	31	14,94%	1,699%	\$ 656.248,88	\$ 894.365,92
01/08/2010	31/08/2010	\$ 37.372.437,40	31	14,94%	1,699%	\$ 656.248,88	\$ 1.550.614,80
01/09/2010	30/09/2010	\$ 37.372.437,40	30	14,94%	1,699%	\$ 635.079,56	\$ 2.185.694,36
01/10/2010	31/10/2010	\$ 37.372.437,40	31	14,21%	1,623%	\$ 626.851,20	\$ 2.812.545,55
01/11/2010	30/11/2010	\$ 37.372.437,40	30	14,21%	1,623%	\$ 606.630,19	\$ 3.419.175,74
01/12/2010	18/12/2010	\$ 37.372.437,40	18	14,21%	1,623%	\$ 363.978,11	\$ 3.783.153,85
01/01/2011	31/01/2011	\$	31	15,61%	1,769%	\$	\$
01/02/2011	28/02/2011	\$	28	15,61%	1,769%	\$	\$
04/03/2011	31/03/2011	\$ 37.372.437,40	27	15,61%	1,769%	\$ 594.887,45	\$ 594.887,45
01/04/2011	30/04/2011	\$ 37.372.437,40	30	17,69%	1,981%	\$ 740.197,88	\$ 1.335.085,33
01/05/2011	31/05/2011	\$ 37.372.437,40	31	17,69%	1,981%	\$ 764.871,14	\$ 2.099.956,47
01/06/2011	30/06/2011	\$ 37.372.437,40	30	17,69%	1,981%	\$ 740.197,88	\$ 2.840.154,35
01/07/2011	31/07/2011	\$ 37.372.437,40	31	18,63%	2,075%	\$ 801.256,66	\$ 3.641.411,01
01/08/2011	31/08/2011	\$ 37.372.437,40	31	18,63%	2,075%	\$ 801.256,66	\$ 4.442.667,68
01/09/2011	30/09/2011	\$ 37.372.437,40	30	18,63%	2,075%	\$ 775.409,68	\$ 5.218.077,35
01/10/2011	31/10/2011	\$ 37.372.437,40	31	19,39%	2,150%	\$ 830.407,01	

VALOR TOTAL ADEUDADO POR CONCEPTO DE INTERESES MORATORIOS:	\$	9.831.638,21
--	----	--------------

En mérito de lo expuesto, en los términos del artículo 446 del Código General del Proceso, el Despacho modificará la liquidación del crédito en la manera como quedó descrita en el anterior cuadro, la cual quedará por un monto total de **NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS CON VEINTIÚN CENTAVOS M/CTE (\$9.831.638.21), por concepto de intereses moratorios.**

Para tal efecto se arriba soporte en cuadro de Excel en medio magnético de la liquidación del crédito.

En virtud de lo expuesto, el Despacho,

RESUELVE:

PRIMERO: MODIFICAR LA LIQUIDACIÓN DEL CRÉDITO allegada por la parte demandante y en su lugar aprobar la realizada por el Despacho, por un monto total de **NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS CON VEINTIÚN CENTAVOS M/CTE (\$9.831.638.21), por concepto de intereses moratorios**, en los términos del cuadro realizado en la parte motiva del presente proveído.



SEGUNDO: RECHAZAR LA OBJECCIÓN a la liquidación presentada por el apoderado de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales – UGPP.

TERCERO: En firme esta providencia continúese con el trámite respectivo.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE


ANDRÉS JOSÉ QUINTERO GNECCO
Juez

FV

 JUZGADO VEINTISÉIS ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD CIRCUITO JUDICIAL DE BOGOTÁ D.C. Por anotación en ESTADO ORDINARIO notifico a las partes la providencia anterior hoy 3 DE JULIO DE 2019 , a las ocho de la mañana (8:00 a.m.)  LIZZETH VIVIANA CANGREJO SILVA SECRETARIA
--

1